Violencia escolar en Magallanes: un problema que requiere compromiso colectivo

Nelson Cárcamo Barrera
profesor

Por más que quisiéramos que no fuera necesario volver sobre este tema, la violencia escolar sigue siendo una realidad que nos interpela como educadores, familias y sociedad. No es la primera vez que hablamos de ello, y lamentablemente tampoco será la última si seguimos abordándolo sólo cuando los hechos se tornan mediáticos o disruptivos. No basta con reaccionar ante el síntoma: es urgente ir al origen, comprender las causas y construir soluciones sostenidas en el tiempo.

En las últimas semanas, distintos establecimientos de la región de Magallanes han reportado situaciones complejas de convivencia escolar. Estas no son aisladas ni se explican únicamente por un mal día o por estudiantes "problemáticos". Son expresiones de un malestar más profundo que atraviesa a nuestras comunidades educativas y que, como tal, requiere ser abordado desde una perspectiva integral y participativa.

Hablar de violencia escolar es incómodo. A veces preferimos no mirar, como si invisibilizar el conflicto lo hiciera desaparecer. Pero esa negación sólo profundiza el problema. Urge reconocer que nuestras escuelas son el reflejo de una sociedad tensionada, donde muchas veces los niños, niñas y adolescentes crecen sin modelos adecuados de resolución pacífica de conflictos. Es en ese contexto donde la violencia, lamentablemente, se vuelve una forma aprendida -y muchas veces tolerada- de relacionarse con el otro.

Frente a esto, el diálogo no puede ser solo un recurso discursivo. Debe transformarse en una práctica cotidiana que cruce todos los estamentos del sistema educativo. Pero para que exista ese diálogo, necesitamos crear espacios reales de encuentro, donde se escuche activamente a estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos y, sobre todo, a las familias.

La formación en valores, empatía, contención emocional y respeto por los demás comienza -y se fortalece- en el hogar. Cuando hablamos de "comunidad escolar", lo hacemos en serio: todos somos responsables, y el compromiso de madres, padres y cuidadores es esencial para construir entornos seguros y respetuosos.

Además, es necesario que otras instituciones públicas y privadas se sumen a esta tarea. Servicios de salud mental, organismos de protección de la infancia, municipios, universidades, centros culturales y deportivos: todos pueden y deben aportar desde sus competencias. La violencia escolar no es solo un problema del Ministerio de Educación o de los colegios; es un fenómeno social que requiere respuestas intersectoriales, sostenidas y contextualizadas.

En este sentido, resulta clave la propuesta de instalar instancias permanentes de trabajo colaborativo en las escuelas y comunidades. Equipos que no solo actúen cuando ocurre una agresión, sino que promuevan una convivencia positiva de manera continua, con énfasis en la prevención, la mediación, la educación emocional y la participación estudiantil.

No podemos permitir que niñas, niños y adolescentes enfrenen solos sus conflictos. Debemos garantizarles entornos donde puedan aprender no solo matemáticas o ciencias, sino también a convivir, a respetar las diferencias y a resolver sus desacuerdos sin recurrir a la agresión.

La violencia escolar no se combate con sanciones aisladas ni con discursos de mano dura. Se previene y enfrenta desde la empatía, el compromiso y la construcción colectiva. Es hora de dejar de mirar hacia otro lado y asumir, entre todos, la tarea de construir escuelas más humanas, más justas y más seguras.